



municipalservicesproject

OCCASIONAL PAPER No. 28 – SEPTIEMBRE DE 2014

El trabajo de las hormigas

Una alianza entre trabajadores y comunidad
por el agua en Colombia

Madeleine Bélanger Dumontier, Susan Spronk y Adrian Murray

Editores de la serie: David A. McDonald y Greg Ruiters

SOBRE EL PROYECTO

El Proyecto Servicios Municipales (MSP) es un proyecto de investigación que estudia alternativas a la privatización y mercantilización de la provisión de servicios de agua y saneamiento, electricidad y sanidad en África, América Latina y Asia. Este proyecto multidisciplinario está formado por académicos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y activistas de todo el mundo que se dedican a analizar modelos alternativos de provisión de servicios a fin de comprender qué condiciones son necesarias para garantizar su sostenibilidad y transferibilidad.

© 2014 Municipal Services Project



Este proyecto está financiado por el gobierno canadiense a través del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).

Socios

Africa Water Network | Queen's University | African Centre on Citizenship and Democracy | Red Vida | Centro de Estudios Superiores Universitarios | Regional Network on Equity in Health in Eastern and Southern Africa | Focus on the Global South | School of Oriental and African Studies | People's Health Movement | Transnational Institute | Public Services International Research Unit | University of Ottawa School of International Development and Global Studies

Índice

Resumen.....	2
Introducción.....	4
Privatización y la necesidad de alianzas	6
La lucha por alternativas a la privatización en Colombia	8
El referendo constitucional	8
Acuerdos público-públicos	9
Acueductos comunitarios.....	11
Manejo comunitario del agua: el caso de La Sirena	13
Historia de la alianza entre trabajadores y la comunidad.....	15
Crear confianza	16
Intercambiar saberes	18
Fomentar la conciencia ambiental	20
Resultados del acuerdo	21
Replicar el modelo	22
Conclusiones	23

RESUMEN

A pesar de la natural abundancia de agua en Colombia, casi un tercio de colombianos –en su mayoría campesinos e indígenas– no tienen acceso al servicio de agua. Para llenar este vacío, los servicios de agua en barrios periurbanos y zonas rurales han sido manejados tradicionalmente por una rica y diversa red de acueductos comunitarios y sistemas autónomos de propiedad comunal. Algunos de estos sistemas comunitarios se encuentran amenazados en un contexto neoliberal de privatización y ‘regionalización’ de los servicios de agua, que impone un modelo mercantil de gestión del agua valorando las economías de escala a costa de la pérdida de la autonomía local.

Este trabajo documenta la lucha de una de estas comunidades por defender y consolidar una alternativa a las formas ‘estatales’ y privadas de prestación de servicios. Nos enfocamos en la zona periurbana y rural del departamento del Valle del Cauca, donde los trabajadores sindicalizados de agua y los ciudadanos del lugar han estado luchando contra la privatización durante casi dos décadas. Ellos se han movilizado en torno a un referendo sobre el derecho al agua, los acuerdos público-públicos y, más recientemente, la defensa de los acueductos comunitarios que prestan servicios esenciales a las poblaciones marginales.

Este proyecto de investigación participativa analiza la experiencia de la creación de alianzas, desde 2008, entre los trabajadores de los sindicatos SINTRACUAVALLE y SINTRAMBIENTE, que representan a los trabajadores del prestador público de agua ACUAVALLE (que opera fuera de la ciudad de Cali) y la agencia ambiental CVC, y los miembros del acueducto de la comunidad de La Sirena. Entre los activistas del agua en Colombia, La Sirena es vista como una alternativa prometedora tanto a los modelos mercantilizados de gestión como a los modelos verticales centrados en el Estado, lo que demuestra que los sistemas democráticos, sin ánimo de lucro y bajo control local, son posibles.

Las alianzas entre trabajadores y comunidad, aunque no son fáciles de lograr, son posibles. Tomó varios años construir la confianza necesaria para concretar la firma de un acuerdo formal de cooperación que finalmente se hizo efectivo en 2012. Desde entonces, los trabajadores y el personal del acueducto han estado trabajando para ampliar la cobertura del servicio y seguir creando capacidades. El personal del acueducto La Sirena y su junta directiva prevén que el aprendizaje acerca de las leyes y normas regulatorias fue especialmente valioso porque no contaban con una capacitación formal en el manejo de sistemas de agua. Gracias al trabajo con el personal del sindicato se han mejorado las técnicas de medición, métodos de facturación y se ha consolidado la estructura tarifaria para asegurar el sostenimiento del acueducto. En términos más generales, ha mejorado también su sistema de contabilidad y de esta manera están en camino hacia una mayor sostenibilidad financiera. La red de distribución se ha expandido y las pérdidas técnicas se detectaron, lo que ha permitido evitar racionamientos de agua desde que la alianza fue creada (un problema que era bastante frecuente en los meses de verano).

En el ámbito del medio ambiente, el personal de la comunidad aprendió a examinar las cuencas con regularidad y reportar faltas; ahora se encuentran trabajando con acueductos vecinos

reconociendo la responsabilidad compartida para proteger las cuencas hidrográficas de las que dependen. Los dirigentes de los acueductos también han propuesto un proyecto para crear un vivero para recuperar la zona después de años de deforestación.

Esta iniciativa inicial en defensa del agua 'pública' ha servido para fortalecer tanto la gestión local de este servicio esencial como para fomentar la solidaridad entre los sindicatos y las comunidades, promoviendo el desarrollo de este tipo de alianzas en la región. Los desafíos son muchos. Es todo un reto tratar de coordinar entre los sindicatos que tienen diferentes mandatos (en este caso, la protección del medio ambiente y el suministro de agua) con una capacidad limitada para financiar el trabajo de la comunidad. Aún más difícil es la cooperación entre los sindicatos y las comunidades dadas sus formas de organización, capacidades e historias que les son propias, especialmente porque implica la construcción de confianza que amerita un ambiente previo de acercamiento y entendimiento.

Tal vez el mayor desafío esté en que el verdadero intercambio y la reciprocidad entre los sindicatos y las comunidades necesita superar la realidad de que estas organizaciones están en una relación inherentemente asimétrica, debido a que los sindicatos cuentan con recursos humanos y financieros formales más fuertes (aunque insuficientes para cubrir las enormes necesidades). Además de la dificultad que significa reconocerse en la diferencia, estos desequilibrios inherentes hacen de las alianzas entre la comunidad y los trabajadores una prueba de voluntad política desde el inicio. Sin embargo, tal intercambio conlleva el potencial de sobrepasar esos criterios y de revalorar las contribuciones únicas de los acueductos comunitarios: su visión de los bienes comunes, el consumo responsable, la solidaridad económica y el autogobierno, entre otros.

Tomando en cuenta lo difícil que fue reunir a un conjunto relativamente pequeño y dedicado de voluntarios para perseguir objetivos a corto plazo claramente definidos en La Sirena, no va a ser fácil reproducir este modelo en otros lugares. Pero si se establece un referente con resultados concretos como fue el caso en La Sirena, puede generarse la confianza necesaria para impulsar nuevos acuerdos de contarse con el financiamiento necesario. Creemos que se pueden sacar tres lecciones principales de nuestra investigación para el desarrollo de futuras alianzas entre trabajadores y comunidades de todo el mundo:

1. Una alianza es solo un **primer paso en la creación de solidaridad a largo plazo**. Es una herramienta de empoderamiento, así como un proceso de aprendizaje para la construcción de movimientos.
2. Estas iniciativas locales, si llegan a ser **parte de una lucha política mayor para alternativas a la privatización**, pueden contribuir al replanteamiento de la visión de 'lo público', inspirar la acción directa y crear identidades colectivas.
3. El **apoyo internacional es clave** en las luchas locales en defensa de los servicios públicos. A su vez, las alternativas locales exitosas dan a los activistas las herramientas para seguir avanzando en iniciativas públicas frente a la reestructuración neoliberal a nivel global.

Introducción

Es una hermosa mañana de domingo y la ciudad todavía duerme. Seis trabajadores de la empresa pública comparten un tinto (café) antes de subir al jeep que nos lleva a las laderas de La Melba en el Valle del Cauca para una asamblea para un posible proyecto de colaboración entre el acueducto de la comunidad y los sindicatos locales. Después de un accidentado viaje por los baches en el calor y otro tinto con un líder de la comunidad y el trabajador responsable del medio ambiente en la zona, uno de los trabajadores sonríe y dice: “¡El que no vive para servir no sirve para vivir!”. En un país que aún lucha por superar la violencia y marcado por las desigualdades extremas, en su declaración se resume un sentimiento general entre los miembros de los sindicatos SINTRACUAVALLE y SINTRAMBIENTE que están haciendo el “trabajo de hormigas”, es decir, trabajando en conjunto para construir un país mejor, un sistema comunitario de agua a la vez.

Colombia tiene el segundo promedio anual más grande de reservas renovables de agua dulce en América Latina, y es el séptimo en el mundo (FAO 2000). A pesar de su abundancia, el 30 por ciento de los colombianos no tienen acceso básico a una fuente de agua mejorada (Garcés 2009). La escasez de agua afecta de manera desproporcionada a las zonas rurales, donde vive un cuarto de la población¹. Las privatizaciones de la década de los 90 estaban destinadas a mejorar los servicios de agua y corregir estas desigualdades, sin embargo, las comunidades más necesitadas fueron afectadas por la reestructuración del sector, lo que hizo que los precios suban, haciendo la prestación de servicios de agua y saneamiento aún menos accesible.

Los activistas emplearon una serie de tácticas para contrarrestar la agenda neoliberal del gobierno, incluyendo una campaña nacional por un referendo para que el derecho humano al agua se establezca como un derecho constitucional, la promoción de ‘acuerdos público-públicos’ para fortalecer los servicios (ej. entre instituciones estatales, departamentales o municipales), y el establecimiento de ‘acuerdos público-comunitarios’ como las alianzas entre trabajadores y comunidades para llevar adelante batallas locales². En las zonas rurales, se pusieron en marcha iniciativas para proteger las cuencas hidrográficas y promover los sistemas tradicionales de gestión del agua, como los acueductos comunitarios.

Este trabajo documenta la lucha por promover alternativas a las formas privadas de prestación de servicios de agua en Colombia. Nos enfocamos en las áreas periurbanas y rurales del departamento del Valle del Cauca, donde los trabajadores y miembros de la comunidad han estado luchando contra la agenda privatizadora del gobierno por casi dos décadas. A pesar de una agresiva campaña para privatizar los servicios de agua y saneamiento en la región, las movilizaciones de trabajadores y comunidades han logrado mantener el control público en la mayoría de las operaciones administradas por ACUAVALLE, la empresa pública que ofrece servicios fuera de Cali, la ciudad capital del departamento. Juntos fortalecieron la capacidad de lucha y fueron capaces de mantener el agua de las áreas urbanas y rurales operadas por ACUAVALLE en manos públicas a través de un acuerdo público-público con la dirección ambiental regional, la Corporación Autónoma de la Región del



Antes de la asamblea para debatir un acuerdo entre los sindicatos y el acueducto comunitario en La Melba, Valle del Cauca.
Foto: Madeleine Bélanger D., 20 de octubre de 2013.

Valle del Cauca, CVC. Los activistas regionales también han trabajado para preservar y fortalecer la capacidad de los acueductos operados por y que pertenecen a la comunidad, especialmente a través de una alianza entre trabajadores y la comunidad en La Sirena (un suburbio pobre de Cali) que ha inspirado otras iniciativas de solidaridad con los grupos rurales de la región.

En un estudio sobre ‘buenas prácticas’ de los servicios de agua en América Latina, La Sirena se identificó como una alternativa prometedora a los modelos mercantilizados de gestión de agua en las áreas periurbanas y rurales, lo que demuestra que la gestión democrática y sin ánimo de lucro de los sistemas de agua públicos es posible (Spronk et al 2012). Más específicamente, nuestro proyecto analizó la experiencia de la creación de una alianza³ entre los trabajadores públicos sindicalizados de SINTRACUAVALLE y SINTRAMBIENTE, que representan a los trabajadores del proveedor de agua ACUAVALLE y de la agencia ambiental CVC, y los miembros del acueducto de la comunidad en La Sirena, Valle del Cauca.

Como miembro de la Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua (Red VIDA)⁴ y de la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de Las Américas (Plataforma-APC), SINTRACUAVALLE se ha comprometido a compartir esta experiencia más allá de sus fronteras. El trabajo de campo se llevó a cabo en octubre y noviembre de 2013. Se combinó una serie de reuniones de planificación conjunta de la investigación, entrevistas individuales, visitas de acueductos y grupos focales para documentar colectivamente la alianza e identificar las lecciones aprendidas. Las actividades de planificación reunieron a los principales miembros de los sindicatos y líderes de la comunidad que participaron en la alianza para establecer la composición de los grupos focales, los temas a abordar, así como para planificar un taller final. Se organizaron dos grupos focales de tres horas por separado con los sindicatos⁵ y miembros de la comunidad⁶, para lo cual recibieron cuestionarios con anticipación y se les invitó a realizar comentarios. Un taller final para discutir los pasos futuros reunió a trabajadores y dirigentes de la comunidad de La Sirena, así como de otros dos acueductos comunitarios que estaban en el proceso de firmar alianzas similares con sindicatos⁷.

Privatización y la necesidad de alianzas

La amenaza de la privatización ha creado importantes retos para los productores y los usuarios de los servicios públicos. En los casos en que estos han sido privatizados, los ciudadanos se enfrentan a tarifas más altas y acceso restringido; se les pide a los trabajadores hacer más con menos para mejorar los márgenes de ganancia, lo que da como resultado despidos masivos. Los servidores públicos de todo el mundo están bajo considerable presión para aceptar concesiones, incluidos salarios, beneficios y pensiones más bajos para reducir los costos de la prestación de servicios. El modelo neoliberal –tanto si la empresa es privada o pública– depende de la precarización del trabajo, ya que los trabajadores contratados reemplazan a los empleados de tiempo completo que alguna vez disfrutaron condiciones dignas de trabajo y seguridad en el empleo a través del proceso de ‘terciarización’, o contratación de terceros (Jorge Iván Vélez, entrevista personal; ver también McDonald 2014).

Como usuarios y productores de servicios públicos, los trabajadores del sector público han sido doblemente afectados por la agenda privatizadora (Barchiesi 2007). No es de extrañar entonces que los sindicatos hayan estado a la cabeza de las luchas para defender, ampliar y mejorar los servicios públicos. Las alianzas entre trabajadores sindicalizados y comunidades han sido especialmente frecuentes en las luchas para defender la provisión de los servicios públicos, como la salud, electricidad, y agua y saneamiento. Estas coaliciones han revertido con éxito la privatización de los servicios públicos en países tan diversos como Canadá, Bolivia, Colombia, El Salvador y Filipinas (Almeida 2006; Spronk y Terhorst 2012).

Stephanie Ross (2013), una historiadora laboral, explica que este tipo de alianzas entre trabajadores y comunidad surgen con mayor frecuencia en el sector público que en el sector privado por varias razones. En primer lugar, las preocupaciones económicas tradicionales de los sindicatos del sector público están inevitablemente ligadas a la provisión de bienes públicos. En efecto, como afirma Ross, es relativamente fácil para los trabajadores del sector público enmarcar sus temas como cuestiones más amplias de la comunidad (ej. en comparación a los trabajadores que fabrican prendas de vestir y textiles para la exportación). En segundo lugar, la prestación de servicios a menudo pone a los trabajadores y miembros de la comunidad en estrecho contacto, facilitando el desarrollo de un interés compartido en los servicios públicos de calidad. En tercer lugar, la reestructuración neoliberal ha politizado los sindicatos del sector público y las organizaciones de la clase trabajadora fragmentada, por lo que la necesidad de coaliciones entre una amplia variedad de organizaciones es urgente. Por último, el alto porcentaje de mujeres sindicalizadas en el sector público y los múltiples espacios de trabajo de las mujeres han facilitado el desarrollo del activismo a través de espacios de producción y reproducción, lo que contribuye a las prácticas conocidas como ‘sindicalismo social’ (Ross 2013) o ‘sindicalismo del movimiento social’ (Camfield 2013), particularmente en los sectores dominados por mujeres, como salud y educación.

En Colombia, a pesar de ser uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser sindicalista, los sindicatos del sector público han estado a la vanguardia de la lucha para defender el ‘carácter

público' del agua como un recurso y un servicio. Los sindicalistas –especialmente del sector público (Amnesty International 2007)– han sido el blanco de ataques violentos y casi 3.000 muertes han quedado en la impunidad desde el año 1986 (HRW 2013). Las cifras más recientes muestran que las tasas de sindicalización han disminuido, pasando del 4,8 por ciento de la fuerza laboral en 2005 al 4,4 por ciento en 2011, debido en gran parte a los cambios en la legislación laboral y la reestructuración de las empresas (US State Dept. 2011). El sector público, sin embargo, todavía tiene una fuerte presencia sindical. En 2010, el 28,7 por ciento de los trabajadores del sector público estuvo representado por un sindicato (ILO 2013). Sin embargo, estos trabajadores están protegidos bajo 'acuerdos concentrados' de trabajo débiles en lugar de contratos colectivamente negociados. El uso de diversas formas de contrato de trabajo es generalizado y el derecho de huelga está muy restringido (US State Dept. 2011).

Colombia no ha sido una excepción a las políticas de privatización que se extendieron por América Latina en los años 80 y 90. En 1991, la reforma constitucional de Colombia abolió el monopolio público sobre los hasta entonces servicios públicos. En el caso de la provisión de agua, este cambio prohibía la provisión de agua a precios inferiores a los costos de operación, un cambio en la política que estaba supuestamente guiado por el "impulso de despolitizar la gestión del agua" (Urueña 2012, 285; ver también Barrera-Osorio y Olivera 2007, 8). El marco institucional se vio reforzado por la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios 142 de 1994, que requiere la constitución de los proveedores de servicios públicos como 'sociedades por acciones', allanando el camino para la corporatización de algunas empresas de servicios públicos (ej. en Medellín, ver Chavez sin fecha; McDonald 2014) y la privatización de otras. En el sector de agua y saneamiento, multinacionales francesas y españolas, como Veolia, Aguas de Barcelona, Canal de Isabel y el Grupo FCC, entraron en el nuevo mercado del agua (ver López sin fecha, 5), lo que llevó a los recortes de puestos de trabajo en los servicios privatizados y precios más altos en las tarifas del agua. Según Oscar Gutiérrez, de la Unión Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos, UNUSP, "dentro de las empresas, la politiquería y la corrupción facilitaron el respaldo de la gente por la privatización" (entrevista personal).

Dentro de este contexto neoliberal colombiano caracterizado por la corrupción y la violencia patrocinada por el Estado, se ha estigmatizado al movimiento sindical generando un deterioro de la imagen de los trabajadores que no solo tienen que luchar contra la privatización del agua, sino que deben ganarse la confianza de la sociedad para fortalecer su capacidad de acción. Con el cambio de milenio, sin embargo, cada vez eran más las evidencias que inclinaban la balanza en favor del agua pública, al ponerse de manifiesto que la privatización había conducido a desigualdades crecientes, y que los usuarios de bajos ingresos estaban pagando un 30 por ciento más por los servicios de agua (Defensoría del Pueblo 2010, 34). Se evidenció que el aumento de la cobertura se vio acompañada por una tendencia de "precios más altos e índices más bajos de consumo" (Barrera-Osorio y Olivera 2007, 10). Mientras el descontento creció en todo el país, también lo hicieron la movilización popular y la crítica internacional que presionaron al gobierno a bajar la guardia (comunicación con Juan Camilo Mira).

Desde el principio, los sindicatos de trabajadores de servicios públicos se embarcaron en campañas contra la privatización. En el Valle del Cauca, la resistencia a la privatización fue particularmente fuerte. Desde la épica lucha para mantener la empresa multi-servicios de la capital EMCALI en manos públicas desde 1995 (ver Novelli 2004) hasta el rescate a última hora de ACUAVALLE de un plan de concesión por 20 años (SINTRACUAVALLE 2012), los trabajadores fueron capaces de asegurar apoyo de las comunidades a las que proveían de los servicios de los intentos agresivos de privatización.

Durante este tiempo, similares adquisiciones privadas se fueron dando en toda América Latina y un gran movimiento de base fue conformado para resistir la privatización del agua en la región, agrupados en torno a la Red VIDA. Los principales actores fueron miembros de los comités de agua, grupos de vecinos, cooperativas y los sindicatos de trabajadores de agua que estaban preocupados por las implicaciones negativas que la privatización tuvo en la equidad y el acceso a los servicios. Activistas del agua en Colombia desarrollaron fuertes vínculos internacionales con una amplia gama de organizaciones que han puesto en marcha campañas exitosas para defender el agua pública en la Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay.

La lucha por alternativas a la privatización en Colombia

La lucha popular en defensa del agua como un bien público ha tomado muchas formas en Colombia. Las principales estrategias se han inspirado en estrategias compartidas con otras luchas de resistencia popular en América Latina (Perera 2013), como la organización de una campaña para un referendo sobre el derecho al agua, la formación de acuerdos público-públicos para evitar la privatización de los servicios de agua, y la defensa de los sistemas tradicionales de servicio de agua localizados mayoritariamente en zonas rurales.

El referendo constitucional

Inspirados en el recurso constitucional uruguayo de 2004 que puso freno a la privatización del agua en ese país, los activistas en Colombia se movilizaron para incorporar el derecho al agua en su Constitución, aunque con resultados ambivalentes (ver Dugard y Drage 2012). En mayo de 2005, los activistas colombianos se agruparon bajo la bandera de Ecofondo para promover el agua como un bien público (Márquez Valderrama 2012). Su campaña cobró impulso y dos años después se decidió conformar el Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) para llamar a un referendo para realizar una enmienda constitucional que “legalmente consagre el derecho fundamental al agua potable, una cantidad mínima de agua libre de cargo (mínimo vital), la gestión pública de los recursos, y la protección de los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua” (Dugard y Drage 2012, 11). Es importante destacar que se buscó el reconocimiento y el apoyo de las miles

de organizaciones comunitarias que habían participado en el suministro de agua durante décadas.

Los trabajadores desempeñaron un papel importante en la coalición que buscaba el referendo y que unió a más de 1.200 organizaciones (FWW 2009). Los trabajadores de SINTRACUAVALLE y sus compañeros de SINTRAMBIENTE participaron activamente en la sensibilización de los ciudadanos y la recolección de firmas. Los sindicatos más grandes, como los de telecomunicaciones y de trabajadores bancarios (ETB y ANEBRE) apoyaron financieramente, y el sindicato nacional de empleados públicos (SINTRAEMDES) organizó foros regionales (Marta Cañon y Rodrigo Acosta, entrevista personal). El 29 de septiembre de 2009, la coalición presentó 2,5 millones de firmas en apoyo al referendo, pero el entonces presidente Álvaro Uribe impulsó profundos cambios en el texto, minimizando las demandas claves (FWW 2009). La CNDAV expresó su preocupación por los cambios ante el Congreso, el mismo que votó a favor de aprobar el texto 'blando', enterrando eficazmente con este acto las demandas de la campaña en junio de 2010. Según Juan Camilo Mira, quien entonces era coordinador de Ecofondo, "[f]ue como un golpe de *knockout* en el *ring*. Fue realmente duro para el movimiento, en nuestro interior nunca pensamos que serían capaces de detener el referendo" (citado en Dugard y Drage 2012, 12). Luego las diferencias políticas entre los actores emergieron de nuevo en luchas sectoriales y de poder que terminaron por minar el proceso, además que la financiación se acabó (comunicación con Juan Camilo Mira).

Sin embargo, Rodrigo Acosta, activista del agua desde hace mucho tiempo y asesor de diversos sindicatos, señala que, aunque en última instancia la campaña fracasó tratando de alcanzar su principal objetivo, continúa el acuerdo socio-político logrado a través del proceso de referendo: "El agua como bien público; el mínimo vital; la lucha contra la privatización; la gestión de los acueductos comunitarios" (entrevista personal). De hecho, el proceso capacitó a los acueductos para que iniciaran su propia "red de ataque para resistir el despojo y la absorción por parte de las grandes compañías públicas y privadas" (Perera 2014, 4), como se explicará más adelante. De manera más amplia, la campaña pudo haber influido en la opinión pública, que dio lugar a cambios de políticas. Bogotá y Medellín implementaron el mínimo vital (Márquez Valderrama 2012, ver también su crítica al enfoque) y los tribunales han prohibido cortes a aquellos hogares con miembros 'vulnerables' (menores de edad, ancianos, desplazados, madres solteras) (Urueña 2012; Vargas Motta 2010).

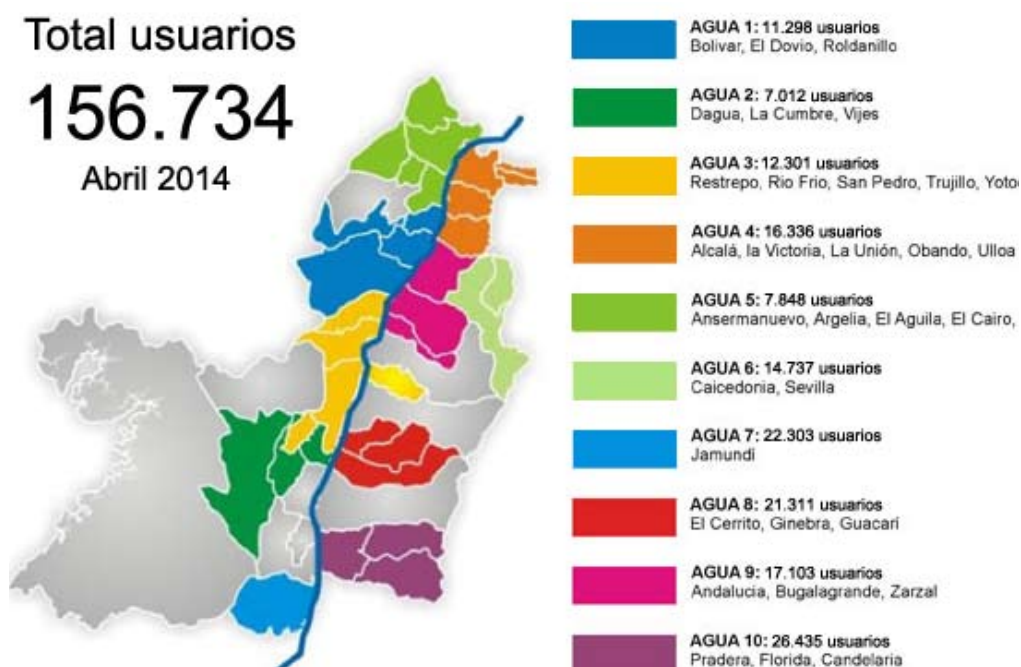
Acuerdos público-públicos

La idea de conformar acuerdos público-públicos (PuP) en Colombia fue inspirada, en parte, por dos empresas públicas de agua: Aguas Bonaerenses SA (ABSA, Argentina) y Obras Sanitarias del Estado (OSE, Uruguay), que son pioneras en este ámbito (Spronk et al 2012, 2014). Estas empresas públicas han proporcionado asistencia financiera y técnica a otras empresas de servicios públicos para ayudar a mantener el agua en manos públicas. Esta cooperación ha sido fundamental en la construcción de un modelo de gestión del agua que mantiene el carácter público de los operadores y permite llegar a la comunidad, en tanto que se obtiene una cobertura de calidad.

Un acuerdo exitoso en Colombia fue llevado a cabo en el Valle del Cauca, donde los activistas del agua alentaron con éxito una alianza entre la empresa pública de agua ACUAVALLE y la autoridad ambiental regional CVC. En 2005, ACUAVALLE transfirió el 39 por ciento de sus acciones del departamento y de los municipios a la CVC para evitar la privatización, lo que hizo posible que el agua potable llegara a siete municipios del Valle del Cauca donde había importantes desigualdades en términos de acceso (SINTRACUAVALLE 2013, 9).

Los trabajadores de la CVC se habían sindicalizado a nivel nacional en el año 2000 en SINTRAMBIENTE (Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental), hasta alcanzar 900 afiliados, y después del acuerdo crearon lazos con su sindicato hermano SINTRACUAVALLE (Sindicato de Trabajadores de ACUAVALLE), que representa alrededor de 300 trabajadores en el Valle del Cauca. Juntos desarrollaron iniciativas concretas para apoyar a las comunidades, en particular en el acueducto comunitario en La Sirena para fortalecer la gestión pública del agua y la autonomía comunitaria, con el respaldo de sus respectivas entidades públicas.

FIGURA 1:
Mapa del servicio de ACUAVALLE en 33 municipios del departamento del Valle del Cauca



ACUAVALLE es responsable de la provisión de agua en el 78 por ciento del territorio del Valle del Cauca, el cual representa el 14 por ciento de los usuarios en el departamento. Además del reto de suministrar agua a una población tan dispersa, el 94 por ciento de sus usuarios es parte de los quintiles con más bajos ingresos, lo que dificulta la recuperación de costos como exige el marco legal neoliberal de Colombia.

Fuente: Mapa de usuarios de ACUAVALLE, <http://www.acuavalle.gov.co/agua.aspx> (consultado el 11 de septiembre de 2014).

Acueductos comunitarios

Dentro de los movimientos por la justicia local y latinoamericana del agua, los acueductos comunitarios se han convertido en una de las alternativas más prácticas y culturalmente apropiadas para abordar los problemas de agua en zonas rurales, demostrando de esta manera que la gestión democrática, sin fines de lucro, con conciencia ambiental y bajo control social es posible.

En Colombia, los servicios de agua se descentralizaron en la década de los 80 y la responsabilidad de mantener y desarrollar la infraestructura se transfirió a los municipios (Barrera-Osorio y Olivera 2007). La mayoría de los acueductos comunitarios se crearon con la inversión pública inicial en infraestructura en las zonas rurales, y desde entonces las comunidades asumieron su mantenimiento con casi ningún o poco apoyo por parte del Estado. En algunos casos fueron las propias comunidades que invirtieron el poco dinero que tenían para construir sus propios sistemas en aquellos años –como en La Sirena, como veremos más adelante. Según un analista, “la gestión local del agua, más inmediatista y fragmentada respecto de lo regional o lo nacional, ha acabado construyendo formas de autogestión y tejidos comunitarios paralelos” (Correa 2006, 12). Hoy en día, hay aproximadamente 11.500 organizaciones comunitarias que prestan servicios de agua en zonas rurales y periurbanas de Colombia (Smits, Rojas y Tamayo 2011); estas son responsables del 40 por ciento de la provisión del servicio de agua en zonas rurales y de casi el 20 por ciento en algunas ciudades (Colmenares y Mira 2007).

Existe una gran diversidad de acueductos comunitarios, pero “ante todo son construcciones populares en torno a la gestión del agua que hacen parte de los territorios sociales en veredas, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y barrios de las diferentes regiones y ciudades del país” (Correa 2006, 14). Tradicionalmente, no son “ni estatales ni privadas” (Rodrigo Acosta, entrevista personal); su “visión de lo público va más allá del Estado, y tienen normatividad propia y mandatos de la propia población para manejar bienes comunes” (Diego Martínez, entrevista personal). Esta autonomía no es sorprendente dada la ausencia casi total del Estado en estas áreas. Los acueductos comunitarios cumplen una función pública esencial por tanto que son “instituciones populares, campesinas, de economía social y solidaria que gestionan un recurso de uso común” (comunicación con Javier Márquez).

Este modelo alternativo ha estado bajo amenaza por las políticas neoliberales implementadas desde la década de los 90. El régimen legal e institucional “arrincona y acorrala a los pequeños usuarios de la zona rural en la ilegalidad” (Uribe Botero 2005, 5), debido al enfoque financiero estipulado por la nueva “estructura reguladora diseñada para empresas” (Brown et al 2013). Muchos han sido absorbidos por operadores más grandes, mientras que otros tuvieron que adoptar un enfoque empresarial y legalizar su estatus para poder seguir funcionando.

Esta amenaza se hizo más patente en 2007 con la implementación de los Planes Departamentales de Agua (PDA), receta del Banco Mundial. Los PDA buscaban centralizar las operaciones a nivel departamental para crear economías de escala para nuevos proveedores de agua regionales. Un

objetivo declarado fue el de atraer inversiones para mejorar los servicios públicos, pero de acuerdo con los críticos se invirtieron fondos considerables en la administración sin una implementación significativa (Vargas Nuñez 2012) y se convirtió en una vía para beneficio privado, permitiendo la entrada de los operadores “especializados” del sector privado sin inversión considerable (Salazar Restrepo 2011; Urrea y Cárdenas 2011). Este camino impuesto por Bogotá también introdujo el mantra de la recuperación de costos de los servicios públicos (Urrea y Cárdenas 2011, 17), forzando la venta de numerosos acueductos municipales y precipitando la desaparición de varios operadores comunitarios. Se puso fin a esa política en 2011 (Urrea 2011), un año y medio después de la elección del nuevo presidente Juan Manuel Santos, pero siguió la “visión de mercados regionales que mercantilizan y comercializan el servicio, aunque las empresas puedan ser públicas” (comunicación con Javier Márquez).

Hoy en día, los acueductos comunitarios se enfrentan a una serie de retos comunes. En el marco normativo actual, su principal problema es la calidad del agua, que no puede abordarse plenamente sin la inversión pública en los sistemas de agua y saneamiento rural. La orientación neoliberal de la legislación de aguas en el país también impone criterios de sostenibilidad financiera que pocos proveedores de estas comunidades pueden alcanzar. Cecilia Roa García, quien forma parte de un proyecto de investigación que ha estado documentando el trabajo de ocho sistemas de agua comunitarios en el Valle del Cauca y Risaralda, hace hincapié en que estos “están cumpliendo una función que el Estado no puede cumplir”; no obstante, reciben muy poco apoyo. Como ella afirma, “están detrás de ayudas municipales para la infraestructura, y no tienen acceso a subsidios sino a través del municipio” (entrevista personal; ver también Roa García y Pulido Rozo 2014). Centrándose en la capacidad de adaptación al cambio climático, el equipo de investigación ha planteado algunos retos adicionales: “La variabilidad en el abastecimiento de agua, las largas redes de distribución en poblaciones de baja densidad, escasa capacidad de almacenamiento, falta de control sobre las cuencas abastecedoras, entre otros” (Brown et al 2013, 1).

La creciente presión sobre los acueductos comunitarios en las últimas dos décadas alentó la creación de asociaciones regionales para apoyar en el aprendizaje y adaptación al nuevo marco legal y regulatorio. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, la Asociación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento en Colombia (AQUACOL) fue creada en 2001 por 24 sistemas locales de agua para construir capacidad jurídica, administrativa y técnica. AQUACOL también actúa como interlocutor entre las asociaciones de la comunidad y las instituciones locales, departamentales y nacionales. Posteriormente, formaron una entidad de alcance nacional, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, para defender sus intereses en los foros nacionales. Según Oscar Gutiérrez (entrevista personal), esa “convergencia de los acueductos comunitarios es la hija del proceso del referendo”.

Los acueductos comunitarios también han sido parte importante de las estrategias de lucha contra la privatización en Colombia. Para la presidenta de SINTRACUAVALLE, Margarita López, estos

ayudaron “a dar la pelea, a dar la lucha contra las privatizaciones para que no vengán a privatizarnos los acueductos rurales, para que se respeten las autonomías de nuestros territorios, para proteger nuestras fuentes ya que estas son las zonas donde nace el agua” (grupo focal). Esta meta compartida entre los trabajadores y los miembros de los acueductos comunitarios posibilitó las condiciones para el exitoso intercambio piloto entre SINTRACUAVALLE, SINTRAMBIENTE y La Sirena, como parte de la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de Las Américas (Plataforma-APC).

Manejo comunitario del agua: el caso de La Sirena

Entre los activistas del agua en Colombia, La Sirena es considerado un ejemplo de ‘buenas prácticas’ por al menos tres razones (Spronk et al 2012). En primer lugar, el agua que distribuye a los residentes es de calidad, es constante y las tarifas son bajas. En segundo lugar, ha sido elogiado por su autonomía, la transparencia y la ética pública: la comunidad es propietaria de la infraestructura y la red, que se ha desarrollado y mantenido de una manera financieramente responsable. Finalmente, es el sitio donde se formó una de las primeras alianzas formales entre miembros de una comunidad y trabajadores de servicios públicos para resistir la agenda privatizadora del agua y para promover modelos alternativos para su suministro.

En 1971, 20 familias invadieron la propiedad de un latifundista en las afueras de Cali y comenzaron la construcción de una comunidad a la que más tarde llamarían La Sirena (Herrera citado en ACCCR 2011). En el punto más alto del conflicto civil colombiano, este asentamiento ocupado por el grupo guerrillero M-19 fue catalogado como zona roja. Tal vez esta es la razón por la que no debe sorprendernos que, hasta el día de hoy, los líderes de la comunidad continúan siendo fuertemente independientes del Estado, como se ilustra a continuación.

Los problemas relacionados con la falta de infraestructura se hicieron más agudos con el crecimiento de la población. En 1979, la primera Junta de Acción Comunal fue elegida democráticamente. La junta ayudó a diseñar y construir la primera bocatoma a mediados de la década de los 80, sacando agua de la quebrada Epaminondas para llevar agua a La Sirena, que en ese momento contaba con unos 1.300 habitantes en 300 hogares. Dos años más tarde, comenzaron el bombeo de la fuente Las Valencias y el río Meléndez, ocho kilómetros aguas arriba, en la reserva forestal Farrallones. Para aumentar la cobertura y mejorar la calidad del agua, la comunidad trabajó con investigadores del instituto de agua en la Universidad del Valle, CINARA, para hacer la transición de un sistema de agua no tratada y que corría a través de mangueras a un sistema de tubería con filtración de arena lenta, que fue construido a principios de 1990. Para hacer frente a una alta turbidez durante los meses de invierno, CINARA también diseñó una nueva planta que combina el uso de filtros con control biológico (UN-Habitat 1996). Para 1995, el sistema de agua de la comunidad estaba entregando agua al

95 por ciento de los hogares. Para gestionar este acueducto renovado, una nueva junta directiva fue creada en 1998 para la Asociación de Suscriptores del Acueducto del Barrio La Sirena, separada de la junta de acción comunal y que incluye los cargos de presidente, vicepresidente, fiscal, secretario y tesorero elegidos por la asamblea general.

Con el tiempo, Cali ha seguido expandiéndose. La Sirena que alguna vez fue una comunidad rural aislada, ha sido absorbida por la ciudad. No obstante, la empresa pública de agua que sirve al área metropolitana, EMCALI, no ha estado interesada en la expansión de servicios de agua y saneamiento formales para llegar a los residentes de La Sirena, en parte porque sería muy costoso distribuir el agua a la ladera desde el valle.

Hasta hoy, los administradores del acueducto valoran esta autonomía y se enorgullecen de que desde 1994 “no se recibe un centavo” del Estado. Por mantener el control de la comunidad sobre el agua, la comunidad ha perdido inversión a nivel departamental y nacional. El actual presidente del acueducto, José Noé García, recuerda que después de que el sistema fuera registrado ante la Superintendencia de Servicios Públicos en 2006, el Ministerio de Salud Pública, y más tarde la administración departamental a través del Programa de Abastecimiento de Agua Rural (PAAR), se ofreció a invertir en una nueva modernización y expansión del sistema, a condición de que el control sobre su funcionamiento se transfiriera al municipio: “Nos opusimos rotundamente... ¡era como entregarles la casa!” (grupo focal). Explicó:

“Nos ha costado, y les ha costado a los demás que lo iniciaron, cantidad de trabajo, ahorrando, arreglando mangueras, aguantando hambre, mojándose, y después de tener una empresa ya legalmente constituida con el servicio 24 horas, que llegue Salud Pública a entregarlo al municipio. ¡No! Y fregaron y fregaron, pero no íbamos a entregarles los títulos. Fue tanta la presión...”

A pesar de que el acueducto de la comunidad ha sido financiado exclusivamente por los residentes, la junta ha logrado expandir el sistema casi a la misma velocidad que el crecimiento de la población en esta zona periurbana. En 2013, la Asociación de Suscriptores del Acueducto del barrio La Sirena estaba entregando agua a 918 abonados (5.500 usuarios), frente a 698 en 2004. Desde 2004, los miembros de la junta directiva no han recibido ningún tipo de salario o bonificación, para asegurar que la mayor cantidad de dinero posible se reinvierta en la red de agua. Su presidente explica: “Si dentro de 5.000 personas no hay cinco que trabajen gratis para una causa tan noble como el acueducto, pues estamos jodidos... Lo que le queda a uno trabajando aquí es la satisfacción del deber cumplido” (José Noé García, grupo focal).

Dos operadores de la planta asalariados mantienen el sistema y una secretaria gestiona la parte administrativa. El acueducto informa sobre los estados financieros y administrativos y los usuarios son convocados a una asamblea anualmente. Los estatutos estipulan que cualquier inversión sobre los 20.000.000 COP debe ser aprobada por una asamblea general para evitar malversaciones.



Equipo de la Asociación de Suscriptores del Acueducto del Barrio La Sirena durante la visita de la planta, con dos representantes de SINTRACUAVALLE.
Foto: Madeleine Bélanger D., 15 de octubre de 2013.

En general, la estructura para la gestión y de costo ha servido como un modelo de eficiencia y transparencia entre sus similares en la asociación regional AQUACOL. Sin embargo, sigue alimentando el debate la dependencia del acueducto en el trabajo voluntario; otro factor es el tema de los subsidios a los que tiene derecho, pero a los que prefiere no acceder por no volverse vulnerable a recursos inciertos del gobierno (el 99 por ciento de los suscriptores son de 'estrato 1' y pagarían menos si utilizaran la metodología tarifaria de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, ver Roa García y Pulido Roza 2014).

A pesar de su éxito, La Sirena se enfrenta a retos relacionados con los ajustes a la compleja legislación sobre agua y el deterioro de la infraestructura. Para hacer frente a estos problemas, la cabeza del acueducto sintió la necesidad de buscar el apoyo de expertos externos. Es de esta manera que los sindicatos locales intervinieron en la construcción de una forma innovadora de alianza en defensa del agua pública y el control local.

Historia de la alianza entre trabajadores y la comunidad

Cuando ACUAVALLE se enfrentó por primera vez con la amenaza de la privatización, a principios de la década de 2000, la presidenta del sindicato, Margarita López, recuerda que se movilizaron en dos frentes: la "lucha argumentativa" y el "proceso social" (grupo focal). Era importante contar con información sólida para contrarrestar los argumentos a favor de la privatización, y así obtener el apoyo de la comunidad: "Necesitábamos estar acompañados de una multitud de masas, usuarios, trabajadores, gente de los diferentes sectores sociales" (grupo focal). La lucha ha sido constante desde entonces y los trabajadores han continuado sus actividades populares de difusión debido a que la empresa pública enfrenta "una serie de amenazas, que han incluido desde su venta, la concesión de la prestación de los servicios, hasta la privatización de sus actividades misionales" (López 2013, 9).

Para SINTRAMBIENTE, nunca fue una cuestión de defensa contra la privatización de su propia empresa, aunque el entonces presidente, Tulio Murillo, toma nota de que el mandato medioambiental se veía socavado por el “manejo politiquero” y por el hecho de que los tomadores de decisiones dentro de la CVC “no se preocupaban por lo verde sino por lo gris” (entrevista grupal SINTRAMBIENTE). Sobre todo, la ayuda a la comunidad de SINTRAMBIENTE se consideraba esencial para contribuir a las luchas más amplias “en contra de los megaproyectos, la minería, los agrocombustibles y el tema de las infraestructuras, que es el tema más fuerte, ya que estas son muy depredadoras de los ecosistemas” (Tulio Murillo, grupo focal). Las comunidades rurales, en particular, fueron reconocidas como aliadas necesarias para trabajar en esos frentes. En concreto, “se necesita el respaldo de la comunidad” para establecer zonas de conservación (Carlos Alberto Posada, entrevista personal). Un objetivo más político del sindicato fue también el de crear conciencia sobre la importancia del agua pública para todos como una forma de mantener vivas las demandas del referendo (Tulio Murillo, grupo focal).

El apoyo de redes internacionales fue clave para que el acuerdo con La Sirena se llevara adelante. Tanto SINTRACUAVALLE como SINTRAMBIENTE están afiliados a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), una federación de sindicatos del sector público que ha promovido la formación de acuerdos público-públicos y alianzas con las comunidades desde la década de 2000. La idea de llegar a las comunidades para defenderse de la privatización surgió por primera vez en el contexto de estas discusiones y encontró apoyo financiero. SINTRACUAVALLE primero contactó a La Sirena en 2008 para aprender más acerca de su experiencia de gestión. Sin embargo, de acuerdo con Olmedo Tapias, quien fue el primer trabajador que fue a La Sirena por el sindicato, unirse a la Plataforma-APC en 2009 fue lo que fortaleció los lazos, y abrió la “posibilidad de colaborar más allá” a través de un acuerdo formal.

Inicialmente, como explica el vicepresidente de SINTRACUAVALLE, Julio César Osorio, “el objetivo del acuerdo voluntario con La Sirena era acercarnos a estas comunidades, conocer más de los acueductos comunitarios, sumarle más gente a la defensa del agua y a lo público” (grupo focal). Es muy probable que la intensidad y duración de los esfuerzos por privatizar ACUAVALLE y el apoyo internacional a la resistencia hayan dado a su sindicato la determinación que otros sindicatos de empresas públicas no han tenido⁸.

Crear confianza

El primer contacto entre la comunidad y SINTRACUAVALLE estuvo marcado por una profunda desconfianza. Los líderes de la comunidad habían tenido muy mala experiencia con la administración pública que quería ‘invertir’ en su acueducto, pero además, la gestión de ACUAVALLE había estado marcada por escándalos de corrupción (Cárdenas Lesmes 2011). Como explica Olmedo Tapias:

“La primera vez que yo fui a La Sirena en busca de Don José Noé, la reacción primaria fue que no me atendía. Después de un lapso de cuatro a cinco llamadas logré que me atendiera. Al llegar al sitio me atendió a través de una reja que dividía la entrada de su negocio de la calle; ahí fue donde me atendió en primera instancia. Fue donde le conté que era trabajador de ACUAVALLE. Para mi sorpresa, la reacción que recibí de él al decir esto fueron estas palabras: ‘Yo, de ACUAVALLE, no quiero saber nada’, ya que él tenía una imagen ya creada de ACUAVALLE. En este momento le expliqué que yo venía en representación de SINTRACUAVALLE, que es el sindicato de los trabajadores, que somos una organización social igual que ustedes, una organización de personas en pro de algo, le expliqué que había una experiencia internacional donde solo quería mostrar el acueducto, que esto no los pondría en compromisos.” (grupo focal)

El presidente del acueducto, José Noé García, explica esta inicial reticencia a participar: “Inicialmente nosotros somos muy celosos, muy prevenidos de que alguien venga al acueducto a pedir información o a obtener información con otros propósitos” (grupo focal).

Por el lado del sindicato, una cierta reticencia a comprometerse también se hizo sentir entre los trabajadores. Existía un “temor de trabajar con la comunidad, por la estigmatización [de los sindicalistas]” (Margarita López, grupo focal). Los trabajadores que participaron en la construcción de este acuerdo querían ir más allá de las cuestiones laborales y revitalizar su empresa después de los escándalos de corrupción que implicaron a directivos de alto nivel (Cárdenas Lesmes 2011). Como recuerda Lina Cañas: “Esperábamos que entiendan que nosotros como sindicato estamos cambiando” (grupo focal). Margarita López añade que se trataba efectivamente de cambiar la imagen del sindicalista para mostrar que se “deja de pensar solo en conquistas laborales, haciendo algo para defender lo público” (reunión de planificación). Incluso para los trabajadores de SINTRAMBIENTE, que apenas podían ser vistos como potenciales operadores, cambiar esta percepción resultó ser un desafío (María Fernanda Castillo, entrevista grupal SINTRAMBIENTE).

Después de que los líderes de la comunidad pusieran de lado sus sospechas, a los trabajadores les tomó dos años más construir la confianza necesaria para hacer posible una colaboración más profunda. Una larga serie de reuniones precedió al primer “pre-acuerdo” firmado en 2010, cuando comenzó el trabajo conjunto para identificar posibilidades concretas de cooperación. En mayo de 2012 se habían movilizado los recursos necesarios y formalizado los principales objetivos del acuerdo. José Noé García subraya lo difícil que fue llegar a la comunidad, dada la sospecha profundamente arraigada de los extraños en general, y de los sindicatos en particular: “El 50 por ciento de la comunidad estaban pensando o estaban comentando que hacer un asocio era quedar con el sindicato de por vida; pues no, se hizo el asocio y cada quien es independiente; nosotros los tenemos a ellos como un referente, como un punto de apoyo” (grupo focal).

Había desconfianza hacia los sindicatos y el Estado en la comunidad, pero una vez que se pusieron de acuerdo para alcanzar una alianza formal que garantizara la independencia del acueducto, el proyecto de cooperación finalmente levantó el vuelo. Los trabajadores fueron seleccionados para participar en la alianza en función de su ubicación y potencial, tanto en términos de experiencia como de compromiso social. “Más que convocados, nos hemos dado”, dice Lina Cañas (grupo focal). Un total de 12 trabajadores de SINTRACUAVALLE y SINTRAMBIENTE y siete representantes de La Sirena han participado directamente en la alianza formal de manera voluntaria⁹.

Intercambiar saberes

Una vez firmado el acuerdo, se establecieron objetivos más específicos. La mayor parte de las preocupaciones inmediatas del acueducto eran de carácter operativo y dirigidas a mejorar la eficiencia en la prestación de servicios. Un equipo de trabajadores se reunió con los líderes de la comunidad para hacer un recorrido de la red con el fin de actualizar los planes y hacer propuestas de mejora y desarrollo a futuro. Wilson Álvarez, un dibujante responsable de los planos y los archivos de red en ACUAVALLE durante más de 28 años –y un miembro activo del sindicato– pasó de forma voluntaria los fines de semana en La Sirena, detallando meticulosamente esos planos: “Tenía que tomar esta información y actualizarla a lo que ellos tenían con sus diámetros, longitudes y mirar lo nuevo que ellos habían hecho para luego armar los planos para que ellos puedan hacer un mejor funcionamiento en cuanto a labores del producto” (grupo focal). Lina Cañas, quien labora en ACUAVALLE y ha sido tesorera del sindicato 15 años, explica que este trabajo les ayudó a cumplir con los reglamentos nacionales, además de mejorar el conocimiento de su propio sistema de agua.



Un trabajador de SINTRACUAVALLE nos enseña los planos del acueducto que actualizaron.
Foto: Madeleine Bélanger D., 15 de octubre de 2013.



Dos trabajadores de la sede Sevilla de ACUAVALLE, quienes capacitaron a los operadores del acueducto La Sirena en la detección y reparación de fugas.

Foto: Madeleine Bélanger D., 20 de octubre de 2013.

La detección de fugas era otra preocupación apremiante para los operadores de red. Wilmer Henao, un trabajador desde hace 18 años en ACUAVALLE y miembro del sindicato, participó en un intercambio con La Sirena y comenta que “eran muy empíricos” (visita de campo, Sevilla). El sindicato llevó operadores de La Sirena hasta Sevilla, donde pasaron dos días con sus pares de ACUAVALLE para aprender a controlar la red y reparar fugas. Carlos Andrés Cucuñame, operador de planta en La Sirena, recuerda: “Estuvimos allá toda la noche, al otro día madrugamos y nos enseñaron a detectar las fugas”. Posteriormente Wilmer Henao regresó a La Sirena para enseñarles cómo reparar daños.

La alianza también tuvo por objetivo fortalecer la capacidad de los trabajadores de los acueductos en lo referente a la normatividad, lo que demuestra tanto el carácter práctico como político del intercambio. Anyela Torres, secretaria de la Asociación de Suscriptores del Acueducto del Barrio La Sirena, explica: “Hay muchos acueductos que le temen a la legalidad, pero ser legal blindará contra la privatización” (grupo focal). El acueducto había estado reportándose a la Superintendencia de Servicios Públicos desde el año 2006, pero el sindicato ayudó a agilizar las tareas administrativas. Lina Cañas, de SINTRACUAVALLE, participó activamente compartiendo su conocimiento sobre la gestión comercial, incluidas las matrículas, la gestión de cobro, así como la metodología para la fijación de tarifas.

Al final del acuerdo formal de cooperación en diciembre de 2012, SINTRACUAVALLE produjo un diagnóstico completo que contemplaba sugerencias para mejoras futuras, y Margarita López presentó los resultados inmediatos de esta iniciativa ante una asamblea de la comunidad.

Fomentar la conciencia ambiental

Por su parte, SINTRAMBIENTE se enfocó en dar a conocer la importancia de la conservación del agua, en un principio entre el personal y los directores del acueducto, y más tarde con la comunidad en general. Se realizaron visitas de campo para identificar los factores de contaminación en las tres cuencas, en las que se demostró cómo afectan a los ecosistemas la deforestación, el mal uso del suelo debido a los métodos agrícolas no sostenibles, las actividades de minería ilegal en pequeña escala y la expansión humana (Tulio Murillo, grupo focal). Para Carlos Alberto Posada fue una oportunidad “para explicar la importancia de la conservación de los ecosistemas y que los compañeros de la junta se conviertan en veedores”. Su enfoque estuvo basado en el empoderamiento: “Las comunidades son las líderes, nosotros solo apoyamos, asesoramos” (entrevista personal).

Tulio Murillo explica que, a raíz de estas visitas, se dieron cuenta de que “tenían la visión del agua solo del momento que sale de la llave. Viendo esta situación, nos vimos en necesidad de crear proyectos de educación para una mejor proyección y visión en cuanto a la valorización de la conservación del agua” (grupo focal). María Fernanda Castillo dirigió el trabajo de sensibilización en La Sirena, dando talleres sobre el manejo de cuencas para alentar a la comunidad a la protección de las fuentes de agua. Sin embargo, fue un reto, ya que “nuestra contribución es menos tangible” (entrevista grupal SINTRAMBIENTE), sin resultados inmediatos y concretos. Pero Tulio Murillo insiste en que se sembraron las semillas de un compromiso más a largo plazo para proteger los ecosistemas:

“Nosotros, en las diversas formaciones que hicimos, les impulsamos para que ellos pudieran hacer esa labor, que fueran a las cuencas y vieran las anomalías que había (...). Yo creo que eso es un buen aporte, y seguimos buscando que ellos sean nuestros aliados como tiene que ser, que a veces se conviertan en los actores principales y no necesiten a la entidad [CVC].” (grupo focal)

Para José Noé García, también fue el comienzo de un compromiso a largo plazo, y después de este acuerdo sentían que tenían acceso privilegiado a la CVC, que la puerta permanecería abierta para ellos. Aprendieron sobre las sanciones si se realizan violaciones del medio ambiente en la reserva forestal Farrallones y pretenden utilizar estos mecanismos. De hecho, ellos sabían que las amenazas a su fuente de agua estarían en curso: “El problema ambiental es que están quemando y talando para hacer potreros en la cuenca, colonizando la zona. La gente se está desplazando para arriba a buscar agua y eso afecta a La Sirena” (José Noé García, grupo focal). Así, los trabajadores de SINTRAMBIENTE redactaron un plan de mejoramiento para ayudar a la comunidad a decidir sobre los próximos pasos.

Resultados del acuerdo

Como parte de esta investigación y de las discusiones con grupos focales que realizamos, la comunidad y los líderes sindicales fueron invitados a evaluar los resultados del acuerdo y establecer claramente los principios que fueron claves para su éxito. Cuando se les preguntó sobre los principios que guían el proceso de un acuerdo exitoso, los trabajadores insistieron en la idea de que la “voluntad es prioridad” (Margarita López, grupo focal) y que los trabajadores tienen que participar con solidaridad y humildad (Olmedo Tapias, grupo focal).

Para construir confianza, es esencial garantizar la autonomía e independencia de la comunidad participante, y tener una visión de acompañamiento. Acordarse en los objetivos, con un lenguaje claro, y realizar las actividades con transparencia son también esenciales. Por último, el acuerdo tiene que cumplir con lo planeado: “Es importante hacerlo cuidadoso, arrancar y terminar la tarea” (Julio César Osorio, grupo focal).

Si los trabajadores aprendieron lecciones sobre solidaridad del proceso, los líderes de La Sirena mencionaron que se sintieron motivados de participar en el acuerdo más que todo debido a las oportunidades de aprendizaje relacionadas con las operaciones y la administración. La experiencia generó un deseo de participar en los esfuerzos más grandes para defender lo público (‘participación’, ‘socialización’ y ‘respaldo’ fueron los términos más usados), y muchos miembros de la comunidad se unieron a las marchas y manifestaciones durante y después del proyecto. A través de este proceso, Margarita López señala que “cambió la manera de ver de los acueductos a los sindicatos, rompimos un paradigma, [vieron] que se puede ayudar sin interés, que el sindicalista no solo se preocupa por él mismo” (reunión de planificación).

Al evaluar los resultados del acuerdo, los participantes de los grupos focales señalaron los beneficios técnicos y una mayor eficiencia en la prestación de servicios y la continuidad del mismo. En La Sirena, estos beneficios fueron posibilitados por la reducción de agua no contabilizada mediante soluciones técnicas básicas. También contribuyó un mejor uso de los recursos hídricos tras la aplicación de controles para el consumo. Como resultado concreto de estas mejoras, la cobertura ha seguido creciendo y no ha habido racionamiento de agua desde que se firmó el acuerdo, una medida que antes era bastante común durante los meses de verano¹⁰.

El personal y la junta directiva del acueducto La Sirena afirman que el aprendizaje sobre las leyes y normas fue especialmente valioso porque no se tenía un conocimiento formal en el manejo de sistemas de agua. Gracias al fortalecimiento de capacidades en el área comercial, mejoraron la micromedición, la gestión de cobro y se consolidó la estructura arancelaria tras la introducción de un cargo fijo para asegurar que los pequeños usuarios no subsidien a los usuarios más grandes. Hoy en día, las tarifas siguen por debajo de las de la zona urbana (Roa García y Pulido Roza 2014, 19). El trabajo con el sindicato permitió detectar conexiones clandestinas y aprendieron acerca de

los procedimientos legales para hacer frente a ellos (José Noé García, grupo focal). En general, han mejorado su gestión de cartera, lo que los ha puesto en camino hacia una mayor sostenibilidad financiera, una exigencia de la regulación nacional.

Es importante destacar que este trabajo operativo, administrativo y comercial conjunto aumentó la confianza general del usuario en el servicio (José Noé García, grupo focal). Según Olmedo Tapias, la experiencia ha “demostrado que lo público y lo comunitario son viables si se administran bien, si se espera que la rentabilidad sea social y no económica” (SINTRACUAVALLE 2012).

A pesar de que aún queda mucho por hacer en el frente ambiental, la alianza ha puesto en marcha algunos controles ambientales básicos. El personal del acueducto controla las cuencas con regularidad y los líderes del acueducto han propuesto un proyecto para la creación de un vivero para restaurar la zona. El siguiente paso es preparar un plan de ordenamiento, a pesar de la falta de recursos.

En general, para José Noé García, “ha sido un aprendizaje muy integral y muy completo por estar articulando las dos cosas: la parte administrativa y operativa y también la parte ambiental” (grupo focal). El proyecto también tuvo una importante disociación: La Sirena está trabajando con acueductos vecinos (Los Mangos, La Luisa y El Cascajal) para ayudarles a mejorar su servicio. Ellos les están mostrando cómo detectar y reparar fugas, conocimiento que aprendieron de los trabajadores de ACUAVALLE. Alentados por SINTRAMBIENTE, también están colaborando en la protección de las cuencas hidrográficas de las que dependen. Por último, como parte de AQUACOL, La Sirena ha sido capaz de compartir esta experiencia y de generar efectos multiplicadores significativos.

Replicar el modelo

Después de su experiencia con La Sirena, SINTRAMBIENTE y SINTRACUAVALLE han impulsado dos nuevos proyectos de colaboración con comunidades rurales más pequeñas. Carlos Alberto Posada, el trabajador de la CVC que estimuló trabajo con Miramar y La Melba (comunidades remotas de las montañas situadas al pie de una cuenca importante), explica que los recursos hídricos son insuficientes para abastecer las necesidades y que el acueducto ACUAMIRAMELBA rápidamente tiene que encontrar fuentes alternativas para continuar sirviendo a sus 57 suscriptores. Los principales problemas son el mal uso de los recursos, la contaminación y la enorme cantidad de agua que se pierde debido a árboles no nativos que se han plantado en el área de la cuenca. En septiembre de 2013, se reunieron los trabajadores de SINTRACUAVALLE con el acueducto ACUAMIRAMELBA en las cercanías de Caicedonia para discutir las necesidades operativas: asistencia para el colocado de tuberías de agua en un deslizamiento de tierra, diagnóstico en alta presión en las tuberías, análisis de calidad del agua y evaluación del caudal. Olmedo Tapias visitó a sus colegas para recoger muestras de agua potable, evaluar las estructuras de control del sistema y tomar muestras microbiológicas de la cuenca. En octubre de 2013, la comunidad se reunió para escuchar la propuesta de acuerdo de SINTRAMBIENTE y SINTRACUAVALLE basado en esta evaluación y firmó el acuerdo después de

acalorados debates; un gran paso teniendo en cuenta que el acueducto fue legalizado en 2011. El acuerdo culminó exitosamente en febrero de 2014, logrando solucionar los problemas técnicos de presión que venían afectando el suministro del agua a la comunidad, pero “la solidaridad continúa” (comunicación con Olmedo Tapias).

Un proceso de cooperación similar tuvo lugar en El Águila con el acueducto COSTA. Esta comunidad ha triplicado su tamaño desde 2000 y ahora está sirviendo a 158 abonados. Como parte del PAAR, se instalaron medidores, pero estos provocaron conflictos en la comunidad. Con el fin de encontrar la forma de hacer frente a estos desafíos de orden comercial, el presidente de la junta, Omar de Jesús Tabares, visitó La Sirena a principios de 2013 para conocer acerca de la administración a través de Anyela Torres, quien fue capacitada por SINTRACUAVALLE. Fue también una oportunidad para ver cómo se potabiliza el agua. Margarita López explica que fue la forma más útil para compartir conocimientos, porque “La Sirena es fuerte en lo que somos deficientes; SINTRACUAVALLE no conoce sistemas pequeños” (visita de campo, Sevilla). Los debates para formalizar un acuerdo entre el acueducto y los sindicatos continuaron, y finalmente se firmó en noviembre de 2013, durante el último taller organizado en el marco de nuestra investigación participativa.

Conclusiones

Los sindicatos del sector público en Colombia han defendido activamente las alternativas a la privatización, más allá de los propios intereses de sus miembros. En el sector del agua, han establecido alianzas con organizaciones no gubernamentales, activistas ambientales y movimientos ciudadanos para el desarrollo de estrategias como la campaña del referendo sobre el derecho al agua, los acuerdos público-públicos, y la formación de acuerdos de la comunidad con los sindicatos. Nuestro estudio de caso sobre el acuerdo entre La Sirena, SINTRACUAVALLE y SINTRAMBIENTE muestra que esta iniciativa en defensa del agua pública ha servido para fortalecer tanto la gestión local de este servicio esencial como para fomentar la solidaridad entre los sindicatos y la comunidad, promoviendo el desarrollo de más acuerdos de este tipo.

Sin embargo, con todos sus potenciales, los acuerdos entre la comunidad y los sindicatos, como el establecido en La Sirena, tienen limitaciones. Además de la dificultad de movilizar los recursos necesarios, uno de los principales desafíos es la organización. Es todo un reto tratar de coordinar entre sindicatos que tienen diferentes prioridades (en este caso, la protección del medio ambiente y el suministro de agua); incluso internamente, cada uno de estos sindicatos se enfrenta a sus propias tensiones y contradicciones. SINTRACUAVALLE se ha beneficiado de un respaldo institucional más sólido de parte de la gerencia de su empresa pública, mientras que para SINTRAMBIENTE ha sido más difícil obtener el reconocimiento de su trabajo por parte de la CVC, además porque este último sindicato es una entidad de orden nacional más grande y fragmentada (Harold Humberto, entrevista personal).

Aún más difícil es la cooperación entre sindicatos y comunidades, debido al hecho de que tienen formas y capacidades organizativas distintas. En nuestro estudio de caso, en los esfuerzos para facilitar la cooperación tuvieron gran influencia tanto la profunda desconfianza de las comunidades frente los trabajadores organizados, caracterizados dentro de la sociedad colombiana como una ‘aristocracia obrera’, como su fuerte defensa de los sistemas locales de agua del control externo. Pero al final, los trabajadores reforzaron la autonomía local mediante la adopción de medidas concretas para erigir garantías jurídicas y operativas para proteger a los acueductos comunitarios. Lo hicieron a pesar de diferencias significativas con su propio modelo de empresa pública, reconociendo la importancia de los sistemas de agua de propiedad comunitaria como entidades que funcionan y que son alternativas culturalmente apropiadas a la privatización.

El mayor desafío, sin embargo, es que el verdadero intercambio y la reciprocidad entre los sindicatos y las comunidades necesitan superar la realidad de que estas organizaciones están en una relación inherentemente asimétrica. Los sindicatos cuentan con tradición organizativa, recursos humanos y financieros formales (aunque insuficientes para las grandes necesidades de la población), y con frecuencia tienen mayor influencia política que las organizaciones en las comunidades. Además de la dificultad que significa reconocerse en la diferencia, estos desequilibrios inherentes hacen de las alianzas entre la comunidad y los trabajadores una prueba a la voluntad política a ser concretizada desde el inicio. Empero, tal intercambio conlleva el potencial de sobrepasar esos criterios y de revalorar las contribuciones únicas de los acueductos comunitarios: su visión de los bienes comunes, el consumo responsable, la solidaridad económica y el autogobierno, entre otros.

Por último, las alianzas entre la comunidad y los sindicatos tienden a ser *ad hoc*, y asegurar su sostenibilidad a largo plazo puede ser difícil. La necesidad urgente de apoyo masivo a menudo surge cuando se debilita el sindicato y la capacidad de los trabajadores para financiar el trabajo comunitario es limitada. En el caso de SINTRACUAVALLE, los trabajadores reconocieron que era el “mejor momento para participar, pero el peor momento financiero” (Lina Cañas, reunión de planificación). SINTRAMBIENTE también reconoció que la creación de una conciencia ambiental no se daría de un día para otro; a pesar de ello, el actuar del sindicato en La Sirena fue de corto plazo. Esta inmediatez también puede explicar en parte la dificultad de problematizar la equidad y el género como objetivos transversales claves en el acuerdo¹¹. Si bien puede considerarse un primer paso, el caso que aquí se presenta aún no puede ser caracterizado como ‘acuerdo profundo’ y sostenible de beneficio mutuo, democrático y participativo y con el potencial para lograr un cambio más profundo (Tattersall 2005).

Teniendo en cuenta lo difícil que fue reunir a un conjunto relativamente pequeño y dedicado de actores para lograr objetivos a corto plazo claramente definidos en La Sirena, no va a ser fácil reproducir este modelo en otros lugares. Sin mencionar la dificultad de desarrollar y ampliar este tipo de alianzas. Nuestro estudio muestra que los sindicatos hasta ahora han preferido replicar el modelo en pequeñas comunidades, en las que es más fácil sortear la política local y donde puedan lograrse

resultados inmediatos. Lo que esta experiencia sugiere es que, si se establece un referente exitoso, como fue el caso en La Sirena, se puede generar la confianza necesaria para impulsar nuevos acuerdos si se puede reunir el financiamiento necesario.

Estas observaciones confirman otras experiencias de alianzas entre comunidades y sindicatos que se formaron en Sudáfrica en la década de 2000. En el caso del Foro Anti-Privatización (APF por sus siglas en inglés), por ejemplo, las diferencias organizativas, institucionales y políticas entre los sindicatos y las organizaciones de la comunidad dieron lugar a grandes dificultades en el trabajo de organizar y movilizar las campañas; las mismas que contribuyeron a la ruptura de la alianza eventualmente (Lier y Stokke 2006; McKinley 2014; Xali 2005). Otra alianza relacionada que fue formada bajo la APF para contrarrestar la privatización del agua en Johannesburgo en 2001, en el contexto de los efectos de fragmentación de la descentralización política y la liberalización económica, se enfrentó a obstáculos similares (Barchiesi 2007). La construcción y mantenimiento de una identidad colectiva de clase trabajadora, que se extienda más allá del sector formal y de los trabajadores sindicalizados, es excepcionalmente difícil de lograr en el contexto de la reestructuración neoliberal en curso, dado que las prioridades y necesidades de los diferentes sectores de la clase trabajadora a menudo entran en conflicto. Por ejemplo, las tensiones surgen cuando los desempleados aceptan empleos precarios previamente realizados por los trabajadores sindicalizados (Millstein y Lier 2012). La construcción de solidaridades obreras fuertes y resistentes para combatir esta fragmentación a través de líneas de organización es un elemento clave de la organización de la clase trabajadora.

Tres lecciones se pueden tomar de nuestra investigación para el desarrollo de alianzas entre trabajadores y comunidades en otras partes del mundo. En primer lugar, una alianza es solo un primer paso en la creación de solidaridad a largo plazo. Se trata de una herramienta de empoderamiento que, en este caso, ha contribuido tanto a la mejora del acueducto comunitario como de las circunstancias materiales de los residentes, así como a un proceso de aprendizaje en la construcción de movimientos que tiene profundas raíces en las luchas por los servicios públicos en Colombia (ver Novelli 2010; Perera 2013). A través de la cooperación se enriquece la visión social, ambiental y política de todos los actores involucrados y se construyen fundamentos sólidos para seguir avanzado juntos en la lucha por un futuro más justo (comunicación con Juan Camilo Mira).

En segundo lugar, tales iniciativas locales, al demostrar que los modelos públicos no estatales de suministro de agua son posibles, pueden constituir alternativas convincentes a la privatización si llegan a ser parte de una lucha política más amplia para alcanzar los cambios estructurales profundos necesarios para socavar el proyecto neoliberal. Alcanzando objetivos prácticos, el caso que aquí se presenta también ha contribuido a la construcción de un movimiento político más amplio en una variedad de maneras: a través de la revitalización y el replanteamiento de las prioridades y preocupaciones de los sindicatos, expandiéndolas fuera del lugar de trabajo; por haber inspirado la participación de ciudadanos en la acción directa en apoyo de los servicios públicos; y mediante el

desarrollo de solidaridades entre el sindicato y la comunidad y de identidades colectivas alrededor de la defensa del servicio público. Por tanto, es desalentador que todavía no se cuente con el respaldo nacional suficiente entre activistas del agua para la realización de este tipo de acuerdos.

En tercer lugar, en un mundo globalizado, el cambio sistémico solo puede ocurrir a través de la participación en niveles superiores que van más allá de lo local. Nuestro estudio de caso y otras investigaciones han demostrado la importancia del apoyo internacional a las luchas locales en un esfuerzo por defender los servicios públicos en Colombia (ver Novelli 2011). A su vez, las alternativas locales alimentan a los activistas en la lucha mundial para avanzar en pro de las opciones públicas y en contra de la reestructuración neoliberal y la privatización de los servicios públicos. Las redes regionales de agua Red VIDA y la Plataforma-APC, así como la federación mundial de sindicatos del sector público, ISP, han contribuido al mismo tiempo que se han beneficiado con el éxito del acuerdo en La Sirena. La experiencia está permitiendo demostrar que hay alternativas y que estas pueden reproducirse en otras partes. Desde la realización de este trabajo entre SINTRACUAVALLE, SINTRAMBIENTE y el sistema de agua autónomo de La Sirena, muchos acuerdos de cooperación se han puesto en marcha por parte de los miembros de la Plataforma-APC en América Latina. Más acuerdos están en camino y tienen el potencial de crear solidaridad a través de las fronteras y entre los diferentes grupos de la sociedad civil que obran en defensa del agua pública. Lo dijo uno de los participantes en nuestra investigación: es solo el primer *round* de la “lucha de las hormigas contra el elefante”.

Notas

1 En áreas rurales, la cobertura es del 69,6 por ciento para saneamiento y del 69,5 por ciento para agua (Vargas Nuñez 2013).

2 Entre los propios sistemas comunitarios también se promueven acuerdos comunitario-comunitarios.

3 Si bien el término ‘acuerdo público-comunitario’ se utiliza a menudo para ese tipo de cooperación, preferimos utilizar ‘alianza’ en este contexto por dos razones. En primer lugar, ‘acuerdo público-comunitario’ es una categoría amplia que también puede incluir acuerdos entre consejos municipales y comunidades, por ejemplo como los de Plataforma-APC en Antioquia (ver Márquez Valderrama 2012, 8). En segundo lugar, el concepto de ‘alianza’ nos permite amarrar nuestra investigación en la literatura en inglés sobre ‘labour-community alliances’, que nos sirve como marco conceptual.

4 La Red VIDA fue creada en 2003 por 54 organizaciones de 16 países de las Américas para defender el agua como un bien común y un derecho humano. Ver <http://laredvida.org/>

5 Siete participantes, incluyendo cinco de SINTRACUAVALLE y dos de SINTRAMBIENTE; tres fueron líderes sindicales y cuatro fueron trabajadores; en total, cinco hombres y dos mujeres.

6 Doce participantes, incluyendo cinco miembros pasados y actuales de la junta directiva, dos operadores de planta, la secretaria, tres usuarios, un representante de AQUACOL; en total, cinco mujeres y siete hombres.

7 Trece participantes, incluidas dos mujeres. Los tres acueductos fueron: La Sirena, Costa y Acuamiramelba.

8 A pesar de su fuerte postura contra la privatización, los sindicatos de trabajadores de otros operadores públicos de agua, tales como EPM, no se han acercado a los acueductos comunitarios. Por lo contrario, algunas Corporaciones Autónomas Regionales han apoyado la privatización de los acueductos como, por ejemplo, Corantioquia (comunicación con Marcela López).

9 Los miembros del sindicato tuvieron la facilidad de tomar días libres para trabajar en el acuerdo, pero la mayor parte fue hecho durante su propio tiempo de descanso. Los miembros de la junta del acueducto no recibieron ningún pago y su trabajo fue en beneficio exclusivo de su comunidad.

10 Aunque es posible que también haya influido el hecho de que los últimos años (2010-2013) han sido los más lluviosos en Colombia.

11 Por ejemplo, solo tres mujeres estuvieron involucradas en el acuerdo con La Sirena y la junta directiva del acueducto está conformada únicamente por varones. Los integrantes de los grupos focales en nuestra investigación tampoco mencionaron la equidad de género como uno de los objetivos de los acuerdos.

Siglas y acrónimos

ACUAVALLE Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca

AQUACOL Asociación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento en Colombia

CINARA Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico, Universidad del Valle

CNDAV Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Plataforma-APC Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de Las Américas

ISP Internacional de Servicios Públicos

Red VIDA Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua

SINTRACUAVALLE Sindicato de Trabajadores de ACUAVALLE

SINTRAMBIENTE Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental

Agredecimientos

Deseamos agradecer el compromiso generoso del Acueducto La Sirena, de SINTRAMBIENTE y SINTRACUAVALLE a lo largo de este proyecto de investigación. Esta investigación no habría sido posible sin el apoyo de la Red VIDA y, en especial, de Margarita López. La experiencia de todos los activistas del agua y representantes sindicales que aceptaron entrevistas también fue muy valiosa en el trabajo de mostrar una imagen lo más precisa posible del contexto colombiano. Nos gustaría dar las gracias a Javier Márquez Valderrama, Juan Camilo Mira y Marcela López por sus interesantes sugerencias para las revisiones. Cualquier error es responsabilidad de los autores. Un agradecimiento especial a Germán Vellojín Gulfo por su ayuda con las discusiones de grupos focales y las transcripciones de las entrevistas y a Marcela Olivera por la traducción.

SOBRE LOS AUTORES

Madeleine Bélanger Dumontier es gerente de proyecto para el Municipal Services Project (MSP) y dirigió el trabajo de campo en Colombia para este proyecto sobre la colaboración entre sindicatos y acueductos comunitarios en 2013. Madeleine tiene un máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Montreal, Canadá. De 2009 a 2011 fue Directora de Comunicaciones de la Fundación Canadiense para las Américas (FOCAL).

Susan Spronk es profesora de Desarrollo Internacional en la Universidad de Ottawa, Canadá. Susan, además de sindicalista activa, es investigadora asociada del MSP. Ha publicado varios artículos y capítulos sobre los movimientos sociales, la formación de la clase trabajadora y las políticas del agua y el saneamiento en América Latina.

Adrian Murray es estudiante de doctorado en la Escuela de Desarrollo Internacional y Estudios Globales de la Universidad de Ottawa, Canadá. Su investigación explora las experiencias del trabajo organizado y los movimientos sociales para oponerse a la reestructuración neoliberal de los servicios públicos, particularmente en el sur de África. También es investigador y activista del movimiento internacional para defender los servicios públicos y es un sindicalista activo.

Referencias

Planificación conjunta, visitas de campo y grupos focales

Reunión de planificación participativa de la investigación con SINTRACUAVALLE (siete participantes), Cali, 7 de octubre de 2013.

Reunión de planificación participativa de la investigación con el acueducto comunitario La Sirena (cuatro participantes y dos observadores de SINTRACUAVALLE), La Sirena, 15 de octubre de 2013.

Visita de la sede de ACUAVALLE en Sevilla y del acueducto comunitario de ACUAMIRAMELBA con SINTRACUAVALLE y SINTRAMBIENTE (cinco participantes), 20 de octubre de 2013.

Grupo focal con los sindicatos (siete participantes: cinco de SINTRACUAVALLE, dos de SINTRAMBIENTE), Cali, 21 de octubre de 2013.

Grupo focal con el acueducto comunitario (12 participantes, incluyendo una observadora de AQUACOL), La Sirena, 24 de octubre de 2013.

Entrevista grupal con SINTRAMBIENTE (cuatro participantes), Cali, 28 de octubre de 2013.

Taller con los sindicatos y tres acueductos comunitarios (13 participantes: cuatro de SINTRACUAVALLE, uno de SINTRAMBIENTE, cuatro del Acueducto La Sirena, tres del Acueducto COSTA, uno del Acueducto ACUAMIRAMELBA), Buga, 9 de noviembre de 2013.

Entrevistas

Rodrigo Hernán Acosta Barrios, Secretario General de la UNUSP y consultor de varios sindicatos, entrevista personal, Bogotá, 26 de septiembre de 2013.

Marta Esperanza Cañon Parra, Directora Corporación MECCA, anteriormente en Corporación AVOCAR, entrevista personal, Bogotá, 26 de septiembre de 2013.

Oscar Gutiérrez, Coordinador Nacional, Unión Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos (UNUSP), entrevista personal, Bogotá, 25 de septiembre de 2013.

Harold Humberto Fernández, SINTRAMBIENTE, entrevista personal, Buga, 9 de noviembre de 2013.

Marcela López, estudiante de doctorado, comunicación por correo electrónico, 16 de junio de 2014.

Javier Márquez Valderrama, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, comunicación por correo electrónico, 11 de junio de 2014.

Diego Andrés Martínez Zambrano, CENSAT Agua Viva, entrevista personal, Bogotá, 30 de septiembre de 2013.

Juan Camilo Mira, ambientalista y asesor en temas de agua y sostenibilidad, comunicación por correo electrónico, 9 de junio de 2014.

Carlos Alberto Posada, SINTRAMBIENTE, entrevista personal, La Melba, 20 de octubre de 2013.

Cecilia Roa García, investigadora de la Fundación Evaristo García, Cali, 29 de octubre de 2013.

Olmedo Tapias Salazar, SINTRACUAVALLE, comunicación por correo electrónico, 7 de agosto de 2014.

Jorge Iván Vélez, presidente de SINTRAEMCALI, entrevista personal, Cali, 9 de octubre de 2013.

Bibliografía

Adaptación al cambio climático en la Colombia rural (ACCCR). 2011. Sitio de estudio. Asociación de Suscriptores del Acueducto del Barrio La Sirena. Cali: CINARA, FEG, UBC, IDRC.

Almeida, P. 2006. Social movement unionism, social movement partyism, and policy outcomes: Health care privatization in El Salvador. En H. Johnston y P. Almedia (eds.), *Latin American social movements*, 57-73. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Amnesty International. 2007. Trade unionists under attack in Colombia: Defending the rights of education, health and public service workers. <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR23/033/2007/en/a56cfc6f-d36a-11dd-a329-2f46302a8cc6/amr230332007en.pdf> (consultado el 4 de septiembre de 2014).

Barchiesi, F. 2007. Privatization and the historical trajectory of 'Social Movement Unionism': A case study of municipal workers in Johannesburg, South Africa. *International Labor and Working Class History*, 71(50): 50-69.

Barrera-Osorio, F. y Olivera, M. 2006. Does society win or lose as a result of privatization? The case of water sector privatization in Colombia. Research Network Working Paper #R-525. Washington, DC: IADB.

Brown, S., Roa García, M.C. y Restrepo, I. 2013. La vulnerabilidad de organizaciones comunitarias del agua frente al cambio climático en Colombia. Cali: CINARA.

Camfield, D. 2013. Renewing public sector unions. En S. Ross y L. Savage (eds.), *Public sector unions in the age of austerity*, 69-79. Winnipeg: Fernwood.

Cárdenas Lesmes, R.M. 2011. Carta del director por el rescate de Acuavalle. *Portafolio*, 8 de mayo.

Chavez, D. Sin fecha. A Janus-faced Latin American company: The corporatization and internationalization of Public Enterprises of Medellín (EPM). No publicado.

Colmenares, R. y Mira, J.C. 2007. Paradojas del agua en Colombia. Privatización y alternativas públicas. En H.D. Correa (Ed.), *Colombia: ¿Un futuro sin agua?* Bogotá: Ecofondo, Foro Nacional Ambiental y Ediciones Desde Abajo.

Correa, H.D. 2006. Acueductos comunitarios, patrimonio público y movimientos sociales. Notas y preguntas hacia una caracterización social y política. Bogotá: Ecofondo.

Defensoría del Pueblo. 2010. El derecho humano al agua. Diagnóstico de la accesibilidad económica y el acceso a la información. Bogotá: Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente.

Dugard, J. y Drage, K. 2012. Shields and swords: Legal tools for public water. MSP Occasional Paper No. 17. Ciudad del Cabo: MSP.

- FAO. 2000. Colombia. http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/COL/index.stm (consultado el 4 de septiembre de 2014).
- Food and Water Watch (FWW). 2009. Colombia's movement for water democracy and constitutional reform. Briefing Paper, junio. Washington, DC: FWW. <http://www.waterjustice.org/uploads/attachments/Colombias-Constitutional-Reform.pdf> (consultado el 4 de septiembre de 2014).
- Garcés, A.W. 2009. Colombia: Fighting development banks for the human right to water. *Upside Down World*, 30 de marzo. <http://upsidedownworld.org/main/content/view/1786/1/> (consultado el 4 de septiembre de 2014).
- Human Rights Watch (HRW). 2013. World report 2013: Colombia. <http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/colombia?page=1> (consultado el 4 de septiembre de 2014).
- International Labour Organization (ILO). 2013. ILOSTAT Database. Colombia. Trade Unions and Collective Bargaining. Trade union density rate by institutional sector (as a percent of total employment). http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_country?_adf.ctrl-state=16vzyvum_n_211&_afLoop=267717752190751 (consultado el 9 de mayo de 2014).
- Lier, D.J. y Stokke, K. 2006. Maximum working class unity? Challenges to local social movement unionism in Cape Town. *Antipode*: 802-824.
- López, M. Sin fecha. Water distribution as an indicator of social inequality. The case of Medellín, Colombia. DesigALdades.net. http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/antigo/static/uploads/marcela_l.pdf (consultado el 4 de septiembre de 2014).
- López, M. (Ed.). 2013. Historia y lucha por el agua en manos públicas. Cali: SINTRACUAVALLE y ISP. http://issuu.com/otapias/docs/30-01-13_historia_y_lucha_por_el_agua-sintracuaval (consultado el 10 de septiembre de 2014).
- Márquez Valderrama, J. 2012. La defensa del agua y la vida en Colombia: Una lucha que apenas comienza. Blue Planet Project y Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
- McDonald, D.A. (Ed.). De próxima publicación. *Repensando la corporatización y los servicios públicos en el Sur Global* (título provisional).
- McDonald, D.A. 2014. Public ambiguity and the multiple meanings of corporatization. En D.A. McDonald (Ed.), *Rethinking corporatization and public services in the global South*, 1-30. Londres: Zed Books.
- McKinley, D. 2014. Labour and community in transition: Alliances for public services in South Africa. MSP Occasional Paper No. 24. Ciudad del Cabo: MSP.
- Millstein, M. y Lier, D.J. 2012. Making communities work? Casual labor practices and local civil society dynamics in Delft, Cape Town. *Journal of Southern African Studies* 38(1): 183-201.
- Novelli, M. 2011. Thinking through transnational solidarity: The case of SINTRAEMCALI in Colombia. En A. Bieler y I. Lindberg (eds.), *Global restructuring, labour and the challenges for transnational solidarity*, 147-162. Oxon y Nueva York: Routledge.
- Novelli, M. 2010. Learning to win: Exploring knowledge and strategy development in anti-privatisation struggles in Colombia. En A. Choudry y D. Kapoor (eds.), *Learning from the ground up:*

- Global perspectives on social movements and knowledge production*, 121-138. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Novelli, M. 2004. Globalisations, social movement unionism and new internationalisms: The role of strategic learning in the transformation of the Municipal Workers Union of EMCALI. *Globalisation, Societies and Education* 2(2): 161-190.
- Perera, V. 2014. Engaged universals and community economies: The (human) right to water in Colombia. *Antipode*: 1-19.
- Perera, V. 2013. From Cochabamba to Colombia: Travelling repertoires in Latin American water struggles. En F. Sultana y A. Loftus (eds.), *The right to water: politics, governance and social struggles*, 241-256. Nueva York: Earthscan.
- Roa-García, M.C. y Pulido-Rozo, A. 2014. El reto de la equidad rural-urbana en el acceso al agua de uso doméstico en Colombia. *Revista de Ambiente y Sostenibilidad*, en prensa.
- Ross, S. 2013. Social unionism and union power in public sector unions. En S. Ross y L. Savage (eds.), *Public sector unions in the age of austerity*, 57-68. Winnipeg: Fernwood.
- Salazar Restrepo, B. 2011. El PND, el servicio de agua y saneamiento básico. Se agudiza el proceso de privatización del agua en Colombia. *Desde Abajo*, 21 de mayo. <http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/9458-el-pnd-el-servicio-de-agua-y-saneamiento-básico-se-agudiza-el-proceso-de-privatización-del-agua-en-colombia.html> (consultado el 4 de septiembre de 2014).
- SINTRACUAVALLE. 2013. Asocio público por el agua en manos públicas: ACUAVALLE-CVC. *Revista SINTRACUAVALLE*, 3 de enero.
- SINTRACUAVALLE. 2012. Convenio de cooperación asocio público-comunitario SINTRACUAVALLE-SINTRAMBIENTE-Acueducto La Sirena, Cali.
- Smits, S., Rojas, J. y Tamayo, P. 2013. The impact of support to community-based rural water service providers: Evidence from Colombia. *Water Alternatives* 6(3): 384-404.
- Spronk, S., Crespo, C. y Olivera, M. 2014. Modernization and the boundaries of public water in Uruguay. En D.A. McDonald (Ed.), *Rethinking corporatization and public services in the global South*, 107-135. Londres: Zed Books.
- Spronk, S., Crespo, C. y Olivera, M. 2012. Las luchas por la justicia del agua en América Latina: Alternativas públicas y 'público-sociales'. En D. McDonald y G. Ruiters (eds.), *Alternativas a la privatización: La provisión de servicios públicos en los países del Sur*, 459-490. Barcelona: Icaria.
- Tattersall, A. 2005. There is power in coalition: A framework for assessing how and when union-community coalitions are effective and enhance union power. *Labour & Industry* 1(2): 97-112.
- UN-Habitat. 1996. La comunidad como proveedora de agua potable en la periferia marginal urbana, La Sirena, Cali (Colombia). Best Practices Database. <http://habitat.aq.upm.es/dubai/96/bp082.html> (consultado el 4 de septiembre de 2014).
- Uribe Botero, E. 2005. La descentralización en el manejo de los recursos hídricos: asunto de equidad, transparencia y eficiencia. Bogotá: Fundación Alejandro Ángel Escobar y Foro Nacional Ambiental.

Urrea, D. 2011. Fin de los Planes Departamentales del Agua: continuidad de la privatización directa. CENSAT Análisis, 21 de noviembre. <http://censat.org/es/analisis/fin-de-los-planes-departamentales-del-agua-continuidad-de-la-privatizacion-directa> (consultado el 9 de julio de 2014).

Urrea, D. y Cárdenas, A. 2011. Aguas sin planes ni dueños: Política de privatización y procesos de resistencia en Colombia. Bogotá: CENSAT Agua Viva.

Urueña, R. 2012. The rise of the constitutional regulatory state in Colombia: The case of water governance. *Regulation & Governance* 6(3): 282-299.

US State Department. 2011. Country reports of human rights practices: Colombia. <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186502> (consultado el 4 de septiembre de 2014).

Vargas Motta, R. 2010. El derecho humano al agua en Colombia. *Revista Republicana*. <http://revista.urepublicana.edu.co/wp-content/uploads/2012/07/El-derecho-humano-al-agua-en-Colombia.pdf> (consultado el 4 de septiembre de 2014).

Vargas Nuñez, P.M. 2013. Planes departamentales de agua nada que despegan. *Portafolio*, 30 de abril.

Vargas Nuñez, P.M. 2012. Congreso pone lupa a alto gasto en Planes de Agua. *Portafolio*, 29 de mayo.

Xali, M. 2005. Seeking trade union and community organisation linkages in the Cape Town Metropolitan Area: Possibilities for new trade unionism and new social movements. Centre for Civil Society Research Report no. 37. Ciudad del Cabo: ILRIG.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA SERIE

- 27 **RECLAIMING PUBLIC HEALTH THROUGH COMMUNITY-BASED MONITORING**
The case of Maharashtra, India
- 26 **THE MALAYSIAN HEALTH SYSTEM IN TRANSITION**
The ambiguity of public and private
- 25 **FAITH-BASED HEALTH SERVICES AS AN ALTERNATIVE TO PRIVATIZATION?**
A Ugandan case study
- 24 **LABOUR AND COMMUNITY IN TRANSITION**
Alliances for public services in South Africa
- 23 **CHILE Y COSTA RICA**
Diferentes caminos a la universalidad de los servicios de salud en América Latina

www.municipalservicesproject.org

Oficina canadiense

Queen's University
Global Development Studies
100 University Ave.
Kingston, Ontario, K7L 3N6
CANADÁ

Oficina sudafricana

University of the Western Cape
School of Government
Private Bag X17
Bellville 7535
SUDÁFRICA